JUSTICIA AMORTAJADA

EL MUNDO. LUNES 12 DE FEBRERO DE 1996

ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO

En un corto espacio de tiempo hemos tenido ocasión de comprobar como la justicia, sea en su ámbito supremo o en los juzgados de instrucción, sea en materia de vida o muerte (GAL) o en materia de honor o indignidad (escuchas del Cesid), ha transformado las ambiciones personales de los gobernantes en razón de Estado y de interés general, sacrificando la investigación del delito y el castigo de los delincuentes al honor y beneficio del Gobierno. Es inútil hacerse ilusiones sobre este tema crucial que traza la raya entre barbarie y civilización. Las próximas elecciones no cambiarán este desolador panorama. Los partidos no osan decir la verdad ni proponen la adecuada reforma de la Administración de Justicia para darle dignidad, independencia y responsabilidad. Pero la verdad es insoslayable. Con un Ministerio de Justicia no habrá nunca justicia independiente del poder. Mientras el ingreso y la promoción en la carrera judicial dependan de un Ministerio de Justicia, los jueces no serán autónomos. Mientras existan resoluciones judiciales que consagren la razón de Estado, para legitimar y proteger con impunidad penal los atentados cometidos por gobernantes o funcionarios contra la integridad física y moral de las personas gobernadas, no hay razón para un Estado de justicia, ni lugar para una corporación judicial que no sea un sindicato vertical de funcionarios.

La resolución judicial que acaba de acordar el sobreseimiento de las querellas por espionaje ilegal del Cesid, o sea, de ponerse bajo las posaderas la denuncia de unos particulares escuchados en sus conversaciones telefónicas sin autorización judicial, es un monumento a la inhumanidad que el ministerio de la justicia levanta, sobre el cementerio de los derechos humanos, amontonando y tapando, con la oscura razón de Estado, el reguero de cadáveres descarnados y de vidas deshonradas que este Gobierno sin alma ha dejado a su paso vandálico por España. La justicia ministerial que inspira al Juzgado de Instrucción basa su brutal resolución en un hecho falso y en un derecho ilegal. En la falsedad de que las escuchas no fueron intencionadas sino mero fruto del azar. En la ilegalidad de que el espionaje de la intimidad personal no es delito cuando lo practica el Estado en interés de la seguridad nacional. Dejemos aparcada de momento esta segunda cuestión que, como en el caso de delitos cometidos en ámbitos protegidos por la declaración de materia reservada, hace depender la legalidad de un acto de la mera afirmación del actor sobre la legalidad de sus intenciones. Dejo la explicación de este misterioso absurdo a la misteriosa doctrina jurídica del ministerio judicial.

La señora que ha decidido sentarse sobre las violaciones de la intimidad denunciadas, tiene el dominio provisional del acto judicial que las configura como «derecho ilegal». Contra ese dominio antijurídico del derecho, los damnificados ya hemos presentado recurso de reforma. Pero lo que «su señoría» no tiene es señorío para convertir en verdad probada la falsedad del hecho alegado por el Cesid de la aleatoriedad de las escuchas. Aparte de que sea inverosímil que el azar tenga inteligencia bastante para seleccionar un centenar de conversaciones telefónicas, entre el millón que andan sueltas por el espacio, y que además tenga voluntad de grabarlas y de conservarlas, la señora del juzgado ha ignorado, como si fueran inexistentes, los casos de escuchas ilegales por medio de la intervención o «pinchazo» directo de una línea telefónica particularmente espiada. Basta mi caso personal, que jamás he hablado desde un teléfono móvil y que, no obstante, figuro entre los seleccionados en esos espacios de Dios por tan providente azar, y no por espionaje directo desde los despachos del Cesid, para destruir la base fáctica de esta expeditiva resolución. Que parece certificar la defunción y amortajamiento de una justicia política, necesitada de ser enterrada en España antes de que se descomponga por completo su cadáver.